

## ENSAYOS

### LOS NUEVOS RETOS DE MEXICO \*

**Miguel de la Madrid Hurtado**

**E**n 1985 se cumplirán 75 años del inicio de la Revolución Mexicana. El nuevo régimen político y orden social establecidos a partir de 1910 han modernizado a nuestra nación en un clima de libertades democráticas y estabilidad política. Hoy, casi a finales del siglo, México se enfrenta a nuevos y difíciles retos. Nuestro desarrollo económico ha generado desequilibrios estructurales que deben ser corregidos y nos enfrentamos a los impactos inmediatos de presiones externas, de la situación económica internacional y de conflictos que afectan al sistema internacional en Centroamérica, el Medio Oriente y otras regiones del Mundo.

En contra de algunas predicciones que se planteaban hace dos años, en el momento más agudo de nuestra crisis, cuando algunos pusieron en duda la capacidad de México para mantener la estabilidad política y el funcionamiento de la economía, hoy se reconocen ampliamente los avances en la superación de nuestras dificultades.

Mi gobierno y el Pueblo de México nos hemos enfrentado a duras pruebas. Hemos tenido que responder con medidas drásticas de ajuste económico para asegurar una recuperación sostenida. Establecimos reformas que refuerzan la honestidad y la eficiencia del Gobierno. Estamos adoptando una política exterior responsable y, sobre todo, nos hemos fortalecido con la ejemplar solidaridad de los distintos grupos sociales: la participación de nuestros ciudadanos ha sido decisiva para superar la crisis.

México está reafirmando sus valores fundamentales. En la medida en que los mexicanos sostengamos nuestro nacionalismo, el compromiso de satisfacer las necesidades básicas de la población y el respeto al Derecho y las libertades democráticas, la

sociedad se mantendrá unida. Nuestro mayor reto actual es traducir esos principios esenciales en nuevas formas de acción pública y social.

II

**L**os logros y la fuerza básica de nuestro país sólo pueden ser entendidos a partir de la evolución histórica de sus principales movimientos sociales y de sus instituciones políticas singulares.

México, después de tres siglos de dominación colonial, era un país predominantemente agrario y exportador de minerales, que representaba la mayor fuente de ingresos de la Corona Española. La primera lucha que generó un amplio movimiento del Pueblo mexicano fue la Guerra de Independencia iniciada en 1810. El Gobierno nacional fue reconocido en 1824, pero la tarea de crear una nación unida y soberana se prolongó.

Los gobiernos siguientes tuvieron que enfrentar poderes regionales semi-autónomos, una iglesia y un ejército tradicionales, diferencias lingüísticas y culturales y la pobreza extrema de más del 90% de la población. Las dificultades internas y la intervención extranjera llevaron a la pérdida de la mitad del territorio de México ante Estados Unidos en 1847. Durante las dos décadas siguientes, se llevaron a cabo reformas liberales y democráticas para superar los residuos del orden colonial y garantizar la soberanía del nuevo Estado Nación, lo que facilitó la unificación del Pueblo de México para obtener la victoria sobre las fuerzas de intervención francesas y sus partidos conservadores en 1867.

Hacia finales del siglo XIX comenzó la construcción de la infraestructura económica para nuestro desarrollo. Sin embargo, los treinta años de la dictadura del General Porfirio Díaz (1876-1910) generaron una extrema concentración de la riqueza, de la tierra y del poder político, lo cual erosionó la legitimidad y viabilidad del régimen y su capacidad para promover un mayor crecimiento interno. El régi-

---

\* Artículo publicado por la revista *Foreign Affairs* en su edición de otoño de 1984, Vol. 63 N° 1 pp. 62-76. Impreso en español mediante permiso de la revista *Foreign Affairs*. Derechos de autor 1984 concedidos por The Council on Foreign Relations Inc.

men fue incapaz de transferir pacíficamente el poder político a un nuevo gobierno. Ello, aunado a condiciones económicas adversas, internas e internacionales, generaron un descontento social creciente, incrementaron la demanda de una democracia política efectiva y acentuaron el rechazo nacional ante el control extranjero de nuestros recursos naturales.

La Revolución Mexicana, iniciada en 1910, buscó recuperar los ideales del movimiento democrático-liberal del siglo XIX y promover la reforma agraria, los derechos laborales y el control de la Nación sobre sus recursos. Se perdieron más de un millón de vidas, sólo el establecimiento de un nuevo pacto social, la Constitución de 1917, logró terminar con la violencia.

Esa es la Constitución que rige a México hoy. Está basada en el nacionalismo, que refleja la voluntad de la Nación de ser una comunidad independiente y vigorosa. El nacionalismo mexicano implica una gran conciencia de nuestra identidad cultural enriquecida por nuestra propia diversidad, y el compromiso de defender a nuestro país de cualquier amenaza contra su independencia. Al contrario del nacionalismo europeo, que fue esencialmente conservador, el nuestro moviliza a todas las fuerzas sociales del País tras el objetivo común de proteger nuestra democracia, no sólo en el sentido político estricto sino como una forma de mejorar significativamente las condiciones sociales y culturales de nuestra población.

Después de 1917, los dirigentes revolucionarios le dieron un nuevo impulso al desarrollo económico e institucionalizaron el régimen político al unificar en 1929 a las distintas fuerzas en pugna en el partido político de la Revolución. En los treinta, México logró la transferencia pacífica y ordenada del poder, recuperamos también la soberanía sobre nuestros recursos petroleros, llevamos a cabo una extensa reforma agraria e impulsamos las metas de una educación pública gratuita y relaciones laborales progresistas. Desde entonces, el movimiento obrero, las organizaciones campesinas, las clases medias y el sector privado han contado con canales institucionales efectivos para promover sus intereses; su participación ordenada ha apoyado la consolidación del Régimen.

Las instituciones y las reglas básicas del sistema político quedaron establecidas con la creación del Partido de la Revolución, hoy el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y han sido fortalecidas desde entonces: una presidencia fuerte sin posibilidad de reelección, la garantía de las libertades demo-

cráticas para todos los ciudadanos, el respeto y la lealtad de las fuerzas armadas a la Constitución y al sistema político, los mecanismos para generar acuerdos de políticas con base en la negociación y un proceso permanente de fortalecimiento de los derechos sociales, a través de reformas legales, y de incremento de los beneficios sociales, como la educación pública, la salud y los servicios municipales.

No hemos logrado todo lo que nos propusimos. El sistema político está aún en proceso de perfeccionamiento. Hemos realizado avances significativos en la instrumentación de reformas democráticas. Los cambios sociales generados por la industrialización, la educación, la organización, el crecimiento de las clases medias y una mayor cobertura de los medios de comunicación se han traducido a nuestra vida política en un papel más activo del Congreso y del Poder Judicial, un mayor pluralismo de la opinión pública, y nuevos partidos políticos que representan a diversos grupos minoritarios.

Nuestro sistema político es crecientemente competitivo. Durante las elecciones presidenciales de 1982 participaron siete partidos políticos, lo cual contribuyó a aumentar significativamente la participación electoral. Con una votación del 70% de los electores, en la cual el Partido mayoritario obtuvo las dos terceras partes de los votos, el nuevo Gobierno recibió un mandato claro y decisivo de promover el cambio ordenado.

Al iniciar mi Administración, envié al Congreso varias propuestas que, después de haber sido enriquecidas y aprobadas, han conducido a importantes reformas en nuestra organización política y económica. Se ha fortalecido la naturaleza mixta de nuestra economía al precisar las responsabilidades del Estado en la conducción del desarrollo y al garantizar la seguridad y las libertades del sector privado y social, que contribuyen con el 80% de la producción interna.

Mis reformas se inspiraron y dependen de la participación social. Estamos estableciendo nuevos mecanismos que aseguren una amplia participación en las decisiones de Gobierno y hemos aumentado las facultades y los recursos de los gobiernos locales a fin de extender su responsabilidad en el desarrollo regional y facilitar el compromiso comunitario.

Para superar los serios problemas de ineficiencia y corrupción, se han adoptado diversas medidas legislativas que promueven una renovación moral. Se busca asegurar la honesta conducción de los funcionarios públicos, mejorar la eficiencia de nuestro sistema de impartición de justicia y el pro-

fesionalismo de los cuerpos de policía, y establecer reglas precisas para la contratación y ejecución de las obras públicas. No obstante la crisis económica, las duras medidas y los cambios estructurales han ayudado a reducir el clima de tensión e incertidumbre que existía al comienzo de mi periodo presidencial.

Mantener la paz social durante este difícil proceso de reordenación económica ha requerido que todos los sectores sean informados con honestidad sobre la situación del País; requiere de constantes negociaciones políticas a nivel nacional y regional, de consistencia con las orientaciones fijadas durante la campaña electoral y de perseverancia en la realización de la estrategia inicial. Ello ha permitido al Sistema continuar generando los acuerdos indispensables para llevar a cabo nuestro programa de reordenación económica.

### III

**E**n los últimos años tanto las instituciones políticas de México como el tejido de su sociedad han tenido que hacer frente a nuevos retos. La tarea más urgente ha sido la de atender las necesidades de una población que ha pasado de 20 a 75 millones en cuatro décadas. México es hoy la onceava nación más grande del Mundo. De haber sido una nación agraria, hoy las dos terceras partes de nuestra población habitan en zonas urbanas. Acelerados procesos de crecimiento económico y de urbanización generaron demandas adicionales y nuevos problemas.

México ha sido uno de los casos más exitosos de crecimiento económico. Mantuvo una tasa superior al 6% durante cuantros décadas. Su capacidad productiva ocupa el noveno lugar mundial, excluyendo a los países socialistas europeos. Sus recursos naturales son abundantes y diversificados. Cuenta con la cuarta reserva mundial de hidrocarburos y es uno de los principales productores de metales ferrosos y no ferrosos. Tiene una agricultura diversificada y su industria es mayor que la de algunos países europeos como Suecia, Bélgica, Dinamarca y Noruega, o de países en desarrollo como Corea del Sur e India. Cuenta con una extensa y moderna infraestructura de transportes y sus servicios turísticos y comerciales compiten con los mejores del Mundo. Ha elevado considerablemente la calidad de sus recursos humanos mediante la creación de importantes centros de investigación y un extenso sistema de educación superior y tec-

nológica. En términos globales, los avances logrados en producción, empleo y servicios básicos son significativos.

El progreso logrado en el área de salud pública nos llevó a que tuviéramos uno de los mayores crecimientos demográficos del Mundo, actualmente la población de la Ciudad de México y su zona metropolitana es igual a la de Centroamérica en su conjunto. Debíamos encontrar la manera de reducir este crecimiento sin afectar la libertad de cada pareja. Mediante la promoción de la planificación familiar se logró reducir la tasa anual de crecimiento de un promedio de 3.2%, durante la década 1970-1980, a un 2.4% para 1984.

A pesar del aumento de población de la última década, el número de personas con acceso a la educación superior y capacitación se triplicó, y más del 70%, de nuestras viviendas cuentan hoy con servicios de agua y energía eléctrica. Hemos asegurado una disminución significativa del analfabetismo, que pasó del 26 al 17% de la población, y garantizado el acceso de todos los niños a la educación primaria. La educación es sin duda el factor básico de los principales cambios que ha tenido México en los últimos cincuenta años.

Sin embargo, aún persisten desigualdades sociales extremas y el País ha tenido que superar una aguda crisis económica. Nuestra economía no tenía la estructura necesaria para resistir los impactos externos. El fuerte énfasis dado al crecimiento industrial interno no fue acompañado por una modernización de nuestra intermediación comercial ni por aumentos en la productividad agrícola. El financiamiento interno fue insuficiente para enfrentar las presiones demográficas conforme éstas se fueron reflejando en demandas sociales por gasto e inversión públicas. Un tipo de cambio sobrevaluado inhibió la integración y competitividad industrial y generó altos incentivos para la exportación de capitales y las compras en el Exterior. Los altos precios del petróleo y la correspondiente disponibilidad de créditos nos permitieron sobrellevar durante algún tiempo esos problemas, pero cuando los precios del petróleo cayeron, las expectativas cambiaron, nuestros desequilibrios se hicieron patentes y comenzó una serie de reacciones que acentuaron la crisis.

En 1982, por primera vez desde la gran depresión de 1929, se redujo el Producto Interno Bruto. La inflación media, que a principios de 1982 era de 30%, alcanzó en los últimos meses una tasa de 150%. El peso se devaluó en un 600%, el déficit del sector público llegó a casi 18% del PIB y la deuda externa

alcanzó la cifra de 77 000 millones de dólares.

En diciembre de 1982, nuestra economía se encontraba en una situación de emergencia. Al asumir mi responsabilidad como Presidente de la República propuse un Programa de Reordenación Económica que en 10 puntos definió las orientaciones y acciones básicas para reducir la inflación, recuperar el crecimiento, sanear las finanzas públicas, fortalecer nuestro sector externo y defender al mismo tiempo los niveles de empleos en el País.

Teníamos la responsabilidad de asumir una solución realista que sentara las bases de un desarrollo duradero. Preferimos los riesgos del cambio ordenado y las reformas a acciones defensivas que resultarían incapaces de hacer frente a los nuevos problemas. Podríamos haber optado por un ajuste más gradual. Ello hubiera requerido la indización de precios y salarios, y hubiera prolongado la crisis aumentando sus costos sociales, como lo demuestra la experiencia de otros países. Consideramos que no podíamos exponer a México a mayores riesgos.

Los mexicanos han comprendido que no había otra opción más que la austeridad, han apoyado el Programa de Reordenación Económica del Gobierno y a través de esfuerzos concertados, se ha recuperado la actividad económica en el País. A pesar de los sacrificios sociales impuestos por la crisis, se ha mantenido un diálogo franco y abierto entre el Gobierno y la sociedad. La mejor prueba de ello es que hemos podido enfrentar nuestras dificultades y resolver nuestras diferencias sin conflictos sociales. Con la fuerza de este consenso, hemos podido instrumentar nuestro programa en forma inmediata, reduciendo así el tiempo del ajuste y corrigiendo nuestros desequilibrios estructurales más graves.

No obstante que ha habido una caída de 5% del PIB en 1983, los programas para mantener los servicios sociales básicos y proteger el empleo y la planta productiva nacional, impidieron un deterioro mayor en la situación del País. Las industrias manufactureras han mostrado ya signos positivos de repunte. Estas medidas —aunadas a un buen año agrícola, en el cual la producción creció a un 4%, a los programas emergentes de empleo, que permitieron generar 400 000 puestos de ocupación en 1983 y a la capacidad de absorción del sector informal de la economía— permitieron evitar un aumento en los niveles de desempleo.

La política de reordenación permitió reducir el déficit del sector público, como porcentaje del PIB, de 18 a 8.7% en 1983. Esto se logró gracias a una clara definición de las prioridades al mismo tiempo

que se mantuvieron los gastos sociales básicos y programas intensivos en mano de obra. Se redujeron los gastos inútiles y se eliminaron los subsidios, se aumentó el ingreso público y se aseguró una honesta y eficiente ejecución de los programas gubernamentales. Los proyectos anteriores de inversión están siendo reevaluados de acuerdo a los costos y las prioridades actuales y simultáneamente, estamos limitando el crecimiento del gasto público y aumentando su eficiencia.

El control de la crisis se logró sin un desplome drástico de nuestra capacidad productiva. Impedimos un proceso hiperinflacionario al lograr que la inflación, que de diciembre de 1981 a diciembre de 1982 alcanzó una tasa del 99%, se redujera a un promedio de 81% para 1983. Al mismo tiempo, en nuestro sector externo, la balanza comercial alcanzó un superávit sin precedente, lo que permitió una fuerte reconstrucción de las reservas internacionales del Banco Central. Cumplimos con nuestras obligaciones financieras internacionales. Adicionalmente pudimos reactivar las importaciones de bienes esenciales así como nuestras exportaciones no petroleras.

El esfuerzo del ajuste de nuestros desequilibrios internos nos ha preparado para entrar en esta segunda mitad de la década de los ochenta, tan incierta e insegura a nivel mundial en condiciones más ventajosas que otras naciones con problemas semejantes.

Estos logros son ciertamente alentadores, pero hemos sufrido una caída de los niveles de vida de la población como resultado de la crisis. Nos preocupan además los costos sociales adicionales impuestos por el aumento de las tasas de interés de Estados Unidos y las restricciones comerciales. Ello reduce nuestras divisas, limita los recursos disponibles para nuestro desarrollo y dificulta la recuperación. De ninguna manera México se ha dejado llevar por la complacencia.

#### IV

**D**e la misma manera como el nacionalismo mexicano orienta nuestro desarrollo interno, es también el principal sustento de nuestra política exterior. Nuestro nacionalismo ha sido configurado en la defensa de nuestra soberanía frente a las intervenciones extranjeras. Los principios de autodeterminación de los pueblos y no intervención tiene para nosotros un significado profundo. Son producto de nuestra propia experiencia histórica, que nos ha llevado a conceder un alto valor a los apegos al Derecho Internacional. Esta filosofía defi-

ne la política exterior de México.

En nuestra frontera norte coexistimos con la nación más rica del Mundo. Nuestra cercanía a Estados Unidos implica importantes oportunidades para nuestro desarrollo económico y, al mismo tiempo, representa posibles desequilibrios. Más allá de nuestra frontera sur compartimos los ideales e intereses de América Latina, desde las grandes naciones como Brasil y Argentina, a países más pequeños como Cuba, con quien hemos cifrado nuestras relaciones a partir del respeto mutuo de la soberanía interna. También nos enfrentamos, en Centroamérica, con una de las regiones más convulsionadas del mundo, cuya dinámica interna está siendo inscrita en el contexto de una confrontación Este-Oeste.

Hemos incrementado nuestra comunicación, enriqueciendo nuestros intercambios y fortalecido nuestra solidaridad con América Latina. La gravedad de nuestra crisis impone la necesidad de coordinar nuestras acciones políticas y de buscar nuevas formas de cooperación económica y cultural. Las democracias recientemente fortalecidas de Sudamérica han facilitado el diálogo y la cooperación.

Un elemento fundamental en nuestras relaciones con Estados Unidos y otros países desarrollados es el aumento de la competitividad de nuestras exportaciones no-petroleras y el establecimiento de flujos netos de capital que aceleren la recuperación de la economía mexicana. Un desarrollo económico de largo plazo que beneficie tanto a México como a Estados Unidos es la mejor manera de preservar una relación amistosa, abierta y respetuosa en una de las fronteras más importantes del mundo. Las posiciones de fuerza y las barreras de contención no son opciones viables. Cualquier movimiento en esa dirección puede generar conflictos que afectarían al bienestar de ambos países y se opondrían a los principios fundamentales de nuestras democracias.

México reconoce los avances que Estados Unidos ha logrado en la ciencia, en sus centros universitarios de investigación, en su agricultura y en su tecnología. Respeta los valores internos de su convivencia federalista, la libertad de sus medios de comunicación y la diversidad que sus inmigrantes le han dado a su tejido nacional.

A su vez, durante décadas, los dirigentes más destacados de Estados Unidos y en general el Pueblo estadounidense, han aprendido a respetar los intereses soberanos de México; su determinación de disminuir los rezagos sociales manteniendo las

libertades; su capacidad para transformar una economía agraria en una organización moderna y crecientemente diversificada; su régimen político singular y flexible y su realidad social compleja; así como su política exterior firme e independiente. Existen bases sólidas para seguir forjando una relación respetuosa, duradera y mutuamente benéfica entre México y Estados Unidos.

Si bien es cierto que nuestras relaciones bilaterales son básicamente satisfactorias, persisten ciertas diferencias en el intercambio, en el área financiera y en política exterior que pueden ser resueltas mediante negociaciones y que nunca deberían llevar a posiciones de poder de corto plazo que pondrían en peligro las relaciones creativas y de largo alcance. En los aspectos de comercio bilateral, las crecientes medidas proteccionistas adoptadas por Estados Unidos han limitado las posibilidades de incrementar nuestras exportaciones. Esto ha afectado a sectores manufactureros y agrícolas de nuestra economía, en los que laboran un gran número de trabajadores y campesinos mexicanos. Al mismo tiempo ha reducido los ingresos de divisas, fundamentales para hacer frente a nuestra deuda externa y reiniciar la recuperación. Por otro lado, la disminución de las importaciones mexicanas de productos estadounidenses afecta los niveles de empleo y de actividad económica de ese país. Para mantener un nivel adecuado del intercambio entre ambos países, y para que continuemos siendo el cuarto consumidor de los productos estadounidenses, requerimos seguir incrementando nuestras exportaciones de bienes y servicios.

Nos preocupan también las relaciones laborales. La situación de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos es un asunto de especial interés para nuestro país. Hemos reiterado apoyo a los derechos e intereses de nuestros conciudadanos. No pretendemos tener injerencia en el proceso legislativo estadounidense, pero queremos manifestar nuestra inquietud por medidas que, como la Ley Simpson-Mazzoli, podrían perjudicar a nuestros compatriotas que con su esfuerzo y trabajo cotidiano realizan una aportación considerable a la economía de Estados Unidos.

En nuestras relaciones con Centroamérica, México siempre se esforzará por lograr una convivencia pacífica y mutuamente benéfica con nuestros vecinos. Ello implica respetarlos y propiciar todo aquello que contribuya a su desarrollo e integración. Desatender o ignorar el conflicto que ahí se dirime significaría el abandono de la responsabilidad histórica de México y la renuncia tácita a la

defensa del interés y la seguridad nacionales.

Una conflagración generalizada en el Istmo centroamericano no tendría para México efectos adversos, a pesar de que la solidez de nuestros principios e instituciones y el nivel de nuestro desarrollo permitirían el fortalecimiento de nuestro nacionalismo y garantizarían la paz interna. Nuestra mayor preocupación es, sin embargo, que un proceso semejante tendría serias consecuencias para el Continente —una carrera armamentista, una disrupción del comercio internacional, mayor intervención extranjera y el estancamiento del desarrollo social y económico en la Región. México no puede permanecer indiferente ante semejante drama humano, con tan vastas consecuencias económicas, sociales y políticas.

Permaneceremos firmes en el apego a nuestro principio de no intervención en los asuntos internos de otros países y promoveremos la solución pacífica de los conflictos sobre la base de la libre determinación de los gobiernos y los pueblos centroamericanos.

La no intervención es un principio fundamental en nuestra política exterior. Se forjó a lo largo del siglo pasado y durante la Revolución Mexicana, cuando hicimos frente a intervenciones extranjeras que buscaban influir en nuestros conflictos internos o imponernos regímenes políticos y formas de organización económica que nos eran ajenos. En todos los casos la lucha resultó sangrienta y costosa, pero siempre promovió la unificación nacional frente a la amenaza externa y concluyó con el fracaso de los grupos apoyados por el extranjero. En efecto, las diferencias y luchas internas de los países latinoamericanos nunca han sido resueltas con la injerencia directa de otros países. Al contrario, creemos que ésta siempre ha complicado los conflictos que se pretendían resolver.

Las estrategias unilaterales de corto plazo no coinciden con los principios y los intereses de México o de los pueblos centroamericanos. Los análisis simplistas derivan en visiones y estrategias de guerra fría y terminan por inscribir los conflictos de la Región en el contexto de una confrontación de las superpotencias. Ese estereotipo desconoce la compleja realidad de los procesos sociales y políticos del Área, las diferencias nacionales e internas, la variedad de proyectos políticos e ideologías de las distintas facciones y la situación única de cada país. El evitar que los conflictos regionales se transformen en zonas de una nueva guerra fría es responsabilidad de las naciones centroamericanas, de cada país latinoamericano y, desde luego, de las

propias superpotencias. Es un reto para nuestras capacidades el negociar de acuerdo a nuestros principios y nuestros deseos de que exista una coexistencia pacífica entre la gran mayoría de nuestros pueblos. Nosotros no apoyamos ni estamos de acuerdo con ninguna intervención en Centroamérica, independientemente de su origen, ya sea estadounidense, soviética, cubana u otra.

Es por ello que México, Venezuela, Colombia y Panamá —el Grupo Contadora— hemos propuesto un programa que supone, además del estricto cumplimiento de los principios esenciales que rigen las relaciones internacionales, la celebración de acuerdos y compromisos políticos que conduzcan, en el ámbito regional, a un efectivo control de la carrera armamentista; la eliminación de asesores extranjeros, la creación de zonas desmilitarizadas; la proscripción del uso del territorio de unos Estados para desarrollar acciones políticas o militares de desestabilización en otros Estados; la erradicación del tráfico de armas; y la prohibición de otras formas de agresión o injerencia en los asuntos internos de cualesquiera de los países del Área.

La negociación a la que hemos convocado desde Contadora representa un rechazo a la guerra y a la lógica de la violencia. Aceptar el uso de la fuerza sería consentir con una política de intromisión en los asuntos internos de los pueblos centroamericanos y pasar por alto las causas reales que han provocado la tensión social. La fuerza cancelaría los propósitos de pacificación, de apoyo a la democracia y de superación de las desigualdades sociales en la Región.

El Grupo Contadora ha recibido el apoyo y el consenso favorable de la comunidad internacional, no solamente de las Naciones Latinoamericanas que por razón natural ven con simpatía la acción del Grupo Contadora (tratamos de resolver los latinoamericanos un problema de latinoamericanos), sino también de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, de la Comunidad Económica Europea, del Congreso de Estados Unidos y del bloque socialista. Recientemente hemos logrado que se entablen negociaciones entre Nicaragua y Costa Rica, para resolver sus conflictos fronterizos. El Grupo Contadora fue llamado por los dos países, se estableció el diálogo y se logró un entendimiento para la vigilancia recíproca de sus fronteras.

Sólo permitiendo que las naciones centroamericanas lleguen a acuerdos dignos y seguros sobre bases de un respeto total a la soberanía nacional

y la búsqueda de una mayor justicia social, podrá lograr Estados Unidos evitar un escalamiento del conflicto. De lo contrario caerán en un involucramiento violento y prolongado.

Sólo con la construcción de órdenes institucionales legítimos, fundados en fuerzas nacionales que conduzcan a cambios sociales, se pueden crear condiciones para una estabilidad regional duradera. La imposición de la fuerza desde afuera y sus consecuentes reacciones internas sólo llevan al predominio de fracciones estrictamente militaristas y altamente radicalizadas. La solución del conflicto centroamericano conjuga negociaciones pacíficas, desarrollo económico y un paulatino fortalecimiento de las instituciones que reflejen los intereses soberanos y garanticen una paz duradera.

Durante mi visita a Wáshington en mayo de 1984, entre los puntos que el Presidente Reagan y yo tratamos en nuestras conversaciones estuvo el conflicto centroamericano. Ahí insistí en la necesidad de entablar una negociación entre Estados Unidos y Nicaragua que pudiera conducir a una pacificación efectiva de la Región, a Nicaragua la expresamos esta misma preocupación. A pesar de las dificultades existentes para encontrar un acercamiento, la posterior visita del Secretario de Estado George P. Shultz a Nicaragua y las conversaciones que han tenido lugar entre representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Nicaragua en Manzanillo, México, pueden significar un avance hacia la reducción del clima de tensión en el Area.

Con respecto a Cuba, existe una larga historia de conflictos y diferencias entre esta nación y Estados Unidos. Pero debemos recordar que en otras situaciones internacionales que parecían no tener posibilidades de acuerdo, se logró un acercamiento benéfico para ambas partes mediante una diplomacia creativa como ocurrió con el establecimiento de relaciones entre la República Popular de China y Estados Unidos. En virtud de que México sostiene relaciones amistosas tanto con Estados Unidos como con Cuba, veríamos con simpatía aquellas decisiones que contribuyeran al relajamiento de las tensiones y al eventual establecimiento de relaciones basadas en el respeto y la moderación de la política exterior de ambos países. Esta es una posibilidad real que requeriría de decisiones complejas, pero que de ser llevada a cabo, tendría un gran potencial político.

Nuestro esfuerzo por lograr una paz duradera va más allá de nuestro hemisferio. Estamos multiplicando nuestros vínculos con Europa, Canadá, Japón y el Este Asiático. Somos firmes en nuestro

deseo de mantener relaciones amistosas con las naciones socialistas y extender los intercambios de cooperación que tenemos con Asia y Africa.

La paz mundial es nuestra principal preocupación, no creo que las superpotencias quieran una guerra de extinción. México seguirá haciendo un llamado a los poderes nucleares para que lleguen a acuerdos serios que reduzcan el riesgo de una guerra nuclear, establezcan compromisos de limitar la carrera armamentista y logren, más adelante, un control general sobre el arsenal bélico.

## V

La situación económica internacional influye de manera importante en los problemas de México y América Latina, Agobia a nuestros países una crisis financiera y económica sin precedentes. Los incrementos en las tasas de interés, la contracción del comercio internacional y las medidas proteccionistas adoptadas por países industrializados constituyen un obstáculo adicional a nuestras posibilidades de recuperación. Estos factores agravan los rezagos sociales de la Región y amenazan la estabilidad política de varias naciones latinoamericanas.

En estas condiciones, hay cada día un mayor consenso de que las decisiones unilaterales de países desarrollados que no toman en cuenta las posibilidades reales de saneamiento de las economías de los países en desarrollo son contraproducentes. Los costos son demasiado altos para ser absorbidos sólo por una de las partes, mayores retrasos en la recuperación de América Latina y Europa llevarían a un estancamiento económico global.

México tiene la convicción, cada vez más generalizada en el Mundo, de que para superar la crisis internacional es necesario replantear el esquema actual de las relaciones económicas internacionales, transformándolo en una estructura más cooperativa en la que las políticas económicas nacionales sean consistentes con la necesidad global de aumentar el comercio internacional y reducir las tasas de interés.

Para México y los demás países latinoamericanos la creciente elevación de las tasas de interés restringe los gastos sociales indispensables, desestimula nuevas inversiones del sector privado y afecta drásticamente el costo del financiamiento interno y la balanza de pagos. Esta situación — aunada a las restricciones comerciales internacionales — ha limitado en extremo nuestra capacidad para pagar las deudas externas y, en más de un sentido, amenaza con perpetuar la situación al tornar

prácticamente inaccesible el financiamiento para el desarrollo.

Ahora más que nunca, el incremento en las exportaciones de los países en desarrollo significa, no sólo el aumento de su capacidad de importar y de atender el servicio de la deuda externa, sino también mayores niveles de actividad económica y empleo en los países avanzados. Paralelamente, se requiere restaurar los flujos netos de recursos hacia los países en desarrollo, para hacer duradera la recuperación económica parcialmente iniciada a partir de 1983.

Los incrementos unilaterales en las tasas de interés nulifican gran parte de la difícil labor de ajuste que han instrumentado, con altos costos, muchos países de Latinoamérica. Por ello se ha ido generalizando el consenso sobre la necesidad de que los deudores participen en términos equitativos junto con los acreedores en el proceso de reordenación de la economía mundial y se promuevan nuevos mecanismos operativos para respaldar a los países miembros en la reestructuración de sus deudas.

La crisis actual debe servir para que la comunidad internacional comprenda que es necesario realizar acciones conjuntas, fundadas en la cooperación regional y en el respeto a los intereses de los acreedores como de los deudores. Estos esfuerzos deberán destinarse a fortalecer la recuperación económica internacional así como la capacidad de los países en desarrollo para cubrir sus obligaciones financieras. De lo contrario el cúmulo de incrementos unilaterales de las tasas de interés podrían llevar a reacciones unilaterales y romper abruptamente las posibilidades de soluciones menos costosas para las naciones involucradas y para la economía internacional.

Para México, los asuntos de la paz y la guerra en Centroamérica y el curso que tomen las relaciones económicas y financieras con Estados Unidos se inscriben, necesariamente, en el ámbito de nuestra relación con América Latina. Por razones de identidad histórica, de unidad cultural y de intereses económicos comunes, nuestro destino está íntimamente ligado al del conjunto de los países latinoamericanos.

El agravamiento de las presiones económicas en materia de deuda y comercio internacional y las tensiones políticas en el área centroamericana han fortalecido, más que nunca, nuestra convicción de que sólo la cooperación a fondo con los demás países latinoamericanos, con Canadá y Estados Unidos, nos permitirá construir un futuro mejor para México y el Continente.

Estamos haciendo frente con realismo a la reordenación interna de nuestras economías. Es necesario que los países industrializados lleven a cabo una política económica consecuente, que evite la transferencia de los costos de la recuperación a los países en desarrollo y sienta las bases para un orden económico mundial más equilibrado.

## VI

**M**éxico está enfrentando sus retos en un mundo en compleja transición. Ha cambiado la naturaleza de las relaciones internacionales por el desarrollo y los altos niveles de bienestar alcanzados por los europeos y los japoneses, el poderío militar de la Unión Soviética y la vitalidad de Estados Unidos, así como por los procesos de transformación social que se están dando en los países en vías de desarrollo. El papel de las grandes corporaciones, las formas de organización de los ejércitos, los impactos de la tecnología comunicativa. El abuso en la explotación de los recursos no renovables y las grandes carencias sociales pendientes de ser satisfechas crean un cuadro internacional con nuevas dificultades y perspectivas.

América Latina tiene múltiples necesidades, amplios recursos y poco tiempo. Se enfrenta tanto a los duros requerimientos de la modernización como a la necesidad esencial de fortalecer su identidad. No podrán repetirse aquí las experiencias de Estados Unidos ni las de Europa, el nuestro requiere ser un camino propio, no puede ser de otra manera.

Muchos países latinoamericanos han vivido los efectos de políticas de industrialización altamente dependientes de las importaciones y sin la capacidad para generar suficientes exportaciones, la mala administración y el derroche de gobiernos populistas, la falta de respeto a los derechos humanos y la ineficiencia para conducir el proceso social de regímenes dictatoriales. Hemos ganado y perdido en nuestras relaciones económicas con el exterior y sido testigos de contiendas mundiales en algunos de nuestros territorios. América Latina ha logrado importantes avances en el crecimiento económico pero aún subsisten grandes rezagos sociales.

Hoy, los países latinoamericanos nos encontramos con uno de los panoramas más sombríos en nuestras relaciones económicas con el exterior. En México tenemos una clara conciencia de lo que estamos enfrentando y de lo que nos proponemos alcanzar; tenemos un proyecto nacional basado en un sólido nacionalismo, que implica el compromiso

de ampliar la justicia social y perfeccionar nuestra democracia y tenemos también un arreglo institucional que ha mostrado su capacidad de llevar a cabo reformas, de adaptarse a las nuevas circunstancias y de promover el desarrollo nacional.

Frente a las enormes necesidades sociales y las difíciles condiciones económicas internas y externas, los valores en torno a los cuales se ha generado y preservado el consenso de México nos ayudan a definir las decisiones estratégicas que estamos tomando en este mundo incierto.

Para defender nuestra soberanía eficazmente, seguiremos fortaleciendo nuestra economía, las bases democráticas de nuestro régimen político, la autonomía de nuestra política exterior y el compromiso de incrementar la igualdad social y proteger los derechos individuales. No tenemos más alternativas que conducir con eficiencia nuestras economías para poder satisfacer las necesidades más urgentes de nuestra población, en vez de desperdiciar los escasos recursos que tendremos en esta década en proyectos inviables, inversiones dispersas o gastos superfluos. Seguiremos reordenando nuestras estructuras productivas para poder competir en la economía internacional en vez de encerrarnos en estructuras que, si no son arcaicas, al menos están insuficientemente adaptadas a los cambios del comercio internacional.

Fortaleceremos las libertades y las prácticas democráticas que son producto de nuestras experiencias históricas. Para promover la justicia social, mantendremos las prioridades sociales de nuestro gasto al mismo tiempo que seguiremos reduciendo la inflación, incrementando la inversión productiva en las áreas rurales, garantizando los derechos sociales colectivos, expandiendo la infraestructura

pública para los servicios urbanos y llevando a cabo importantes esfuerzos de conservación y protección de nuestros suministros de agua y recursos no renovables.

No creo que haya otro camino para afianzar nuestra identidad nacional y latinoamericana más que el de actuar de acuerdo a lo mejor de cada una de nuestras historias; negociar nuestras diferencias para poder sumar nuestros esfuerzos y estrategias, reducir el dispendio y el lujo para fortalecer a clases medias más amplias y a sectores de trabajadores mejor protegidos, respetar todas las ideologías y creencias sin perder el consenso nacional; y reconocer nuestros rezagos en todos los órdenes para reducirlos en las áreas fundamentales para nuestro desarrollo.

El mundo vive un proceso de transición en el que nadie puede anticipar todavía sus resultados. Las grandes interpretaciones han sido desbordadas por la realidad, los dogmas vulnerados por el pragmatismo. En ese proceso tan propenso a la *real politik* o a la intransigencia, tenemos que reconstruir estas relaciones en transición con realismo pero también con principios, con audacia e imaginación pero también con responsabilidad y sobre todo como producto de un conjunto de aportaciones nacionales. Ya no hay país, por pequeño que sea, que no pueda poner en riesgo el orden internacional. Ya no hay nación, por poderosa que sea, que no dependa de sus intercambios y relaciones con el exterior en forma significativa.

En México hay un amplio potencial de desarrollo. Con trabajo, perseverancia y firme apego a nuestros principios estamos mejor preparados para llevar a cabo los cambios necesarios. En estos tiempos inciertos, México está enfrentando sus nuevos retos.